

ANEXO IV										
PLANTA PERMANENTE										
JURISDICCION: 5500 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
ENTIDAD: 612 - TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION										
PROGRAMA: 54 - TASACION DE BIENES										
ESCALAFON: SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (DTO. Nº 993/91).										
			NIVELES ESCALAFONARIOS							SUB TOTAL
ACTIVIDAD PRESUP.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD ORGANIZATIVA	E.E. (*)	A	B	C	D	E	F	
01	TASACION DE BIENES	PRESIDENCIA	5			2				2
		AUDITORIA INTERNA	1		1					1
		DIRECCION de SALAS, TECNICO LEGAL, de INFORMATICA y ADMINISTRACION		3	20	12	5			40
TOTALES			6	3	21	14	5			43

(*) Miembros del Tribunal de Tasaciones de la Nación y Auditor Interno.

VETO

Decreto 1491/2001

Obsérvase el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.472.

Bs. As., 21/11/2001

VISTO el Expediente Nº 1383/2001 del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA, el Proyecto de Ley Nº 25.472 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 23 de octubre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el Proyecto de Ley citado en el Visto, se transfieren a favor de la Provincia de Mendoza, los ramales ferroviarios “A-12” y “A-16” que vinculan las localidades de Mendoza – Las Cuevas y Mendoza – Luján de Cuyo, respectivamente, ambos de la ex–Línea General Belgrano, juntamente con los inmuebles, depósitos y bienes que por accesión legal, integran los ramales que se transfieren.

Que el ESTADO NACIONAL – ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO – es titular de dominio o tiene afectados al uso diversos inmuebles ubicados en la zona de influencia de la traza del ramal “A 12” en el tramo comprendido entre las localidades de Mendoza y Las Cuevas.

Que en algunos de los inmuebles que el Proyecto de Ley sancionado propone transferir, se encuentran los Cuarteles y Campo de Instrucción “USPALLATA”, Refugio de tropas “LAS CUEVAS”, Refugio de tropas “GENERAL SAN MARTIN” y Refugio de tropas “GENERAL LAS HERAS”.

Que la existencia y mantenimiento de los citados destacamentos militares son de vital importancia para la defensa nacional y no han sido declarados innecesarios a los fines militares.

Que la indeterminación de los inmuebles incluidos en la transferencia que se pretende realizar, y la necesidad de mantener los mencionados destacamentos militares hacen necesaria la observación del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.472.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL elevará oportunamente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION un Proyecto de Ley disponiendo la transferencia de los mencionados ramales, individualizando los inmuebles que serán transferidos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 83 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1º — Obsérvase el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.472.

Art. 2º — Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — José H. Jaunarena. — Carlos M. Bastos.

VETO

Decreto 1477/2001

Obsérvase el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.471.

Bs. As., 20/11/2001

VISTO el Expediente Nº 020-004279/2001 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.471, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 23 de octubre de 2001, las Leyes Nros. 23.696 y sus modificatorias, 24.145 y sus modificatorias, 24.156, 25.453 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2778 del 31 de diciembre de 1990, 584 del 1º de abril de 1993, 1106 del 31 de mayo de 1993, 628 del 11 de julio de 1997, la Resolución Conjunta Nº 1507 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y Nº 1270 del ex MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL del 2 de diciembre de 1994, la Resolución Nº 72 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS del 25 de julio de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el referido Proyecto de Ley, en su Artículo 1º, aclara el alcance del apartado c) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.145 y sus modificatorias, en cuanto a la definición de los sujetos en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada de YPF SOCIEDAD ANONIMA.

Que el Artículo 2º del citado Proyecto de Ley reconoce, por parte del Gobierno Nacional, una indemnización económica a favor de los ex agentes de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO

que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada de YPF SOCIEDAD ANONIMA por causas ajenas a su voluntad o que incorporados, hubiesen sido excluidos y define las pautas para el cálculo de dicha indemnización.

Que el Artículo 3º del Proyecto de Ley suspende por un cierto plazo, todas las causas judiciales por reclamos sustentados por los ex agentes de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones Clase C de YPF SOCIEDAD ANONIMA, o en su defecto el pago del valor de tales acciones.

Que el Artículo 4º del referido Proyecto de Ley dispone la notificación de las liquidaciones que les correspondan a los ex agentes de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO, en relación de dependencia de la misma al 1º de enero de 1991.

Que el Artículo 5º autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a la emisión de Bonos para la consolidación de la deuda reconocida por ese Proyecto de Ley.

Que cabe tener en cuenta que en el marco de la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696 y sus modificatorias, en su Capítulo III, se incorporaron a la legislación positiva los denominados Programas de Propiedad Participada.

Que en este contexto el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la transformación en sociedad anónima de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO, mediante el Decreto Nº 2778/90.

Que la Ley Nº 24.145 y sus modificatorias dispuso, en su Artículo 8º, que el Capital Social de YPF SOCIEDAD ANONIMA estuviera representado en distintas clases de acciones, atribuyendo la Clase C a las que adquiriera el personal de la empresa, hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social, bajo el régimen de Propiedad Participada de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias.

Que mediante el Decreto Nº 1106/93, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó el texto del Estatuto Social de YPF SOCIEDAD ANONIMA.

Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias, el PODER EJECUTIVO NACIONAL estuvo facultado para utilizar o no a los Programas de Propiedad Participada, como un instrumento válido dentro de los distintos procesos de privatización evaluando tal utilización, según los criterios de oportunidad y conveniencia.

Que la enumeración de los tipos de sujetos adquirentes en los Programas de Propiedad Participada contenida en el Artículo 22 de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias, es taxativa.

Que el Artículo 26 de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias estableció, que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar.

Que el Artículo 30 de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias consagró el principio de onerosidad para la adquisición de las acciones y la necesidad de suscribir un Acuerdo General de Transferencia en el cual debían fijarse el precio de las acciones y el modo de pago.

Que de acuerdo al Artículo 38 de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias, el manejo de las acciones asignadas a un Programa de Propiedad Participada, mientras dichas acciones no hayan sido pagadas y liberadas de la prenda, debía ser obligatoriamente sindicado.

Que mediante el Decreto Nº 584/93, el PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentó el Capítulo III de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias, disponiendo los principios generales e instrumentación de los Programas de Propiedad Participada, que reflejaron las dis-

posiciones de dicha Ley en los aspectos detallados en los considerandos anteriores.

Que el Programa de Propiedad Participada de YPF SOCIEDAD ANONIMA fue instrumentado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme a la Resolución Conjunta Nº 1507/94 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y Nº 1270/94 del ex MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que por Resolución Nº 72/95 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el paquete accionario Clase C de YPF SOCIEDAD ANONIMA, oportunamente reservado por el ESTADO NACIONAL, para la instrumentación del Programa de Propiedad Participada, fue distribuido entre todos los empleados en relación de dependencia al 7 de julio de 1993, de acuerdo a las condiciones y documentación contenida en la Resolución Conjunta citada en el considerando anterior.

Que mediante el Decreto Nº 628/97, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó un procedimiento de cancelación del saldo de precio de venta de las acciones Clase C de YPF SOCIEDAD ANONIMA, autorizó la venta de las mismas por cuenta y orden de los empleados adherentes al Programa de Propiedad Participada y aprobó lo actuado por el ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en su carácter de Autoridad de Aplicación del respectivo Programa de Propiedad Participada.

Que como se observa, la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias sólo estableció las bases conceptuales de los Programas de Propiedad Participada y, en ningún caso conformó automáticamente la existencia de dichos programas, es decir, que a través de la misma se le otorgó al PODER EJECUTIVO NACIONAL la facultad de utilizar de distintas formas este tipo de operatoria, dentro de un proceso privatizador.

Que dichos programas estuvieron dados en un marco que requería de la instrumentación para ser operativos y funcionar, lo que no pudo hacerse sin haber privatizado la empresa y sin que los sujetos legitimados —empleados del ente a privatizar que continuaban en relación de dependencia al privatizarse la misma— hayan aceptado su incorporación y pagado el precio de sus acciones con dividendos y/o con el porcentaje correspondiente al bono de participación en las ganancias que la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias, menciona en los Artículos 30 y 31.

Que no cabe dudas que la privatización de YPF SOCIEDAD ANONIMA se materializó el 7 de julio de 1993, fecha en la que se colocaron en los distintos mercados del mundo las acciones Clase D destinadas según el Estatuto Social para su venta al capital privado, transfiriéndose el patrimonio del organismo estatal al sector privado.

Que fue a partir del 7 de julio de 1993, que comenzaron a generarse derechos para los empleados adherentes, en tanto sólo desde esa fecha se encontraban en disponibilidad de adquirir los títulos en el marco de un régimen eminentemente oneroso, tal como se desprende de los Artículos 30 y 35 de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias y, del Artículo 8º inciso c) de la Ley Nº 24.145 y sus modificatorias.

Que ello es así por cuanto sólo al momento de transferirse el patrimonio del organismo estatal al sector privado, se produjo la privatización a la que hacen referencia las leyes citadas, por lo que, sólo al personal que se encontraba vinculado laboralmente a YPF SOCIEDAD ANONIMA al 7 de julio de 1993, le correspondía el derecho a participar en el referido Programa, a través de la suscripción de la documentación correspondiente.

Que la aclaración a que hace referencia el Artículo 1º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.471, respecto del apartado c) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.145 y sus modificatorias, en el cual se reconoce el derecho del personal que se desempeñaba en rela-

ción de dependencia en YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO, al 1º de enero de 1991, implica el desconocimiento del conjunto de facultades otorgadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias, a raíz de las cuales quedaba en condiciones de decidir la modalidad más adecuada para llevar adelante el proyecto de privatización, la posibilidad de constituir un Programa de Propiedad Participada, la selección de la clase de “sujetos adquirentes” a incluir en su diseño y la medida correcta de esa participación accionaria.

Que además, el reconocimiento que se hace en ese Proyecto de Ley al personal de la Empresa que se encontraba en relación de dependencia en la fecha indicada, alteraría por completo el régimen aplicado por el ESTADO NACIONAL.

Que por otro lado, la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias y el Decreto Nº 584/93 dispusieron para estos Programas de Propiedad Participada una función primordial en el proceso de las privatizaciones: la participación de los empleados de las empresas en el manejo, destino y resultados a través de su carácter de accionistas de las Sociedades.

Que desde esta perspectiva, los Programas de Propiedad Participada no pueden ser considerados como una especie de indemnización laboral por haber pertenecido a las empresas que se privatizaron, sino como una forma de participación de los empleados en la vida y resultados de las empresas en las cuales laboraron y a las cuales aportaron con su esfuerzo a la generación de resultados.

Que por ello, el reconocimiento que se realiza en el Artículo 2º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.471 de una indemnización económica a favor de los ex agentes de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO que no hubieren podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos, importa una desnaturalización de la referida función primordial que se pretendió aplicar a los empleados de las empresas privatizadas.

Que por otra parte, la indemnización que les reconoce el Artículo 2º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.471 a los ex agentes de YPF SOCIEDAD ANONIMA que, incorporados al Programa de Propiedad Participada, hubiesen sido excluidos del mismo, importa un desconocimiento de las disposiciones que regularon el ingreso y la permanencia de dicho personal en el Programa y a las cuales éstos se sometieron voluntariamente.

Que las disposiciones a que se hace referencia, fueron dictadas teniendo en cuenta el espíritu que guió la creación de los Programas de Propiedad Participada, según el cual ninguna persona que haya dejado de pertenecer a las empresas donde los mismos fueron establecidos, pueden formar parte de ellos, circunstancia ésta, que surge tanto de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias, del Decreto Nº 584/93 y de la Resolución Conjunta Nº 1507/94 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y Nº 1270/94 del ex MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que a todo ello cabe agregar, que los derechos económicos de los empleados que optaron por adherir al Programa, recién nacieron a partir del 27 de octubre de 1993, fecha en la cual se depositaron los primeros dividendos, cumpliéndose con el requisito de onerosidad establecido en los Artículos 30, 31, 37, 38, 39 y 40 de la Ley Nº 23.696 y sus modificatorias.

Que en otro aspecto, el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.471 al reconocer una indemnización económica a favor de los ex agentes de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO, contradice la política de “déficit cero” encarada por el ESTADO NACIONAL, la cual fue ava-

lada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION a través de la sanción de la Ley Nº 25.453.

Que la Ley Nº 25.453 establece el Régimen de Equilibrio Fiscal con Equidad, a través de la modificación del Artículo 34 de la Ley Nº 24.156, régimen consistente en una reducción del gasto público y en el equilibrio de las finanzas, evitando recurrir al financiamiento interno o externo para hacer frente a los gastos que demande el presupuesto nacional.

Que por ello, corresponde observar y devolver la norma sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL tiene competencia para el dictado del presente en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 83 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Obsérvase el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.471.

Art. 2º — Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el Proyecto de Ley citado en el artículo anterior.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — Domingo F. Cavallo.

SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Decreto 1495/2001

Modifícase la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, adecuando el Régimen de Capitalización, introduciendo pautas de mayor transparencia en el Régimen de las Comisiones que perciben las A.F.J.P., y para la percepción de la cobertura de los riesgos de invalidez y fallecimiento; como también condiciones de encaje con el fin de mantener una garantía suficiente a los intereses de los trabajadores comprendidos en el Régimen de Capitalización Individual. Vigencia.

Bs. As., 22/11/2001

VISTO la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, y los Decretos Nros. 460 de fecha 5 de mayo de 1999, 1306 de fecha 29 de diciembre de 2000, 438 de fecha 17 de abril de 2001 y 1387 de fecha 1º de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario efectuar las adecuaciones pertinentes al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) instituido por la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, tendientes a morigerar los efectos que sobre los afiliados podrían derivarse de la rebaja transitoria de los aportes personales dispuesta por el Decreto Nº 1387/01.

Que, asimismo, corresponde introducir pautas de mayor transparencia en el régimen de las comisiones que perciben las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a efectos de permitir la plena y efectiva vigencia del principio de libertad de elección del que gozan los afiliados a dicho Régimen, en los términos de los artículos 41 y concordantes de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias y evitar efectos confiscatorios sobre los aportantes de menores ingresos, eliminándose la posibilidad de establecer comisiones expresadas en una suma fija. En el mismo sentido, deben aplicarse pautas para

la asignación de los indecisos, de modo tal que no le generen perjuicios, dado su nivel de ingresos, las comisiones que perciben las Administradoras, teniendo en cuenta las posibilidades de atención de sus intereses en razón de su dispersión geográfica.

Que, con el mismo objetivo, resulta necesario establecer pautas de percepción de la cobertura de los riesgos de invalidez y fallecimiento que, sin modificar sustancialmente su extensión, permita generar un rebaja de los costos del seguro que pueda trasladarse a los precios a cargo de los afiliados con el consiguiente efecto de un mayor monto a capitalizar de los aportes personales que ingresen en las respectivas cuentas de capitalización individual.

Que, asimismo, es necesario establecer condiciones de encaje que se adecuen a la madurez y extensión de los fondos de modo tal de mantener una garantía suficiente a los intereses de los trabajadores comprendidos en el Régimen de Capitalización Individual, así como posibilitar la imputación transitoria, contra eventuales déficit de encaje, de las sumas que las AFJP apliquen al pago de anticipos a sus afiliados mientras dura la gestión de sus beneficios.

Que la situación económica general que vive el país ha hecho necesario la toma de medidas de urgencia y que, en consecuencia, resulta imprescindible e impostergable la adopción de otras que, conexas con aquellas, hagan que su implementación no afecte los derechos de los ciudadanos, promoviendo la preservación de los principios esenciales del régimen previsional basado en la capitalización individual, por lo que cabe utilizar los mecanismos institucionales previstos en la CONSTITUCION NACIONAL, precisamente, para situaciones de emergencia como la presente.

Que cabe destacar que algunas disposiciones contenidas en el presente son similares a las previstas en el Decreto Nº 1306/00 con relación al Régimen de Capitalización, el que fuera suspendido transitoriamente por el Decreto Nº 438/01 en razón del dictado de las medidas cautelares contra el citado Decreto Nº 1306/00.

Que, por otra parte, en ningún momento en orden al estado procesal de las causas, se ha manifestado agravio concreto contra las medidas específicas que aquí se incluyen por lo que, en consecuencia, el dictado del presente no colisiona con el Decreto Nº 438/01 ni con las medidas cautelares dictadas judicialmente.

Que resulta imperiosa la adopción de la medida de que se trata por configurar una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.

Que se ha expedido la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS en virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº 111 de fecha 31 de octubre de 2001 de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS,
DECRETA:

Artículo 1º — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 30 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias por el siguiente:

“ARTICULO 30.- Las personas físicas comprendidas en el artículo 2º podrán optar por no quedar comprendidas en las disposiciones establecidas en el Título III del presente Libro dentro del plazo de NOVENTA (90) días a contar de la fecha de ingreso a la relación laboral de dependencia o a la de inscripción como trabajador autónomo. Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos administrativos para el ejercicio de la mencionada opción.”

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 43 de la Ley 24.241 y sus modificatorias por el siguiente:

“ARTICULO 43.- Los aportes previstos en el artículo 39 de la presente ley que hayan sido in-

gresados al SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) correspondientes a trabajadores incorporados al Régimen de Capitalización que no hubieran elegido Administradora en el plazo establecido en el artículo 30, serán depositados en una cuenta que a tal efecto abrirá la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) que no devengará intereses. La SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL deberá dictar la normativa pertinente para la instrumentación de la asignación de los afiliados entre las Administradoras que perciban la menor comisión del trabajador comprendido, teniendo en cuenta la distribución geográfica de la red de sucursales de la Administradora, transfiriendo a ellas los aportes acumulados en la cuenta transitoria.

La SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES dictará las normas pertinentes estableciendo los requisitos mínimos exigibles para que las Administradoras participen en este proceso de asignación.

Los trabajadores asignados de acuerdo al procedimiento establecido precedentemente podrán hacer uso del derecho previsto en el artículo 44 sin las restricciones del artículo 45, inciso a), para el primer traspaso.”

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 68 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTICULO 68.- El régimen de comisiones que cada Administradora fije se ajustará a las siguientes pautas:

a) Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones la acreditación de los aportes, la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, la obtención de rentabilidad del fondo de jubilaciones y pensiones, y el pago de los retiros que se practiquen bajo la modalidad de retiro programado.

Podrá debitarse del saldo de las cuentas de capitalización individual de los afiliados que no registren acreditación de aportes en un período determinado, la porción de la comisión del presente inciso correspondiente al costo del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, conforme lo establezcan las normas reglamentarias, las que deberán tener concordancia con lo determinado en el artículo 95, inciso a).

b) La comisión por la acreditación de los aportes obligatorios sólo podrá establecerse como un porcentaje de la base imponible que le dio origen. No se aplicará esta comisión sobre los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo.

c) Las comisiones por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos sólo podrán establecerse sobre la base de un porcentaje sobre los valores involucrados.

d) La comisión por la rentabilidad de las inversiones del fondo de jubilaciones y pensiones se calculará tomando como referencia el valor de la cuota correspondiente al 2 de julio de 2001 y se establecerá de modo uniforme para todas las Administradoras en un VEINTE POR CIENTO (20%) del excedente a una rentabilidad anualizada del CINCO POR CIENTO (5%). Dicha comisión no podrá exceder en ningún caso el UNO CON CINCUENTA POR CIENTO (1.50%) del fondo de jubilaciones y pensiones.

e) La comisión por el pago de los retiros programados sólo podrá establecerse como un porcentaje mensual sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual del beneficiario.

Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES para que establezca el procedimiento, plazos y demás requisitos para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 69 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTICULO 69.- Las administradoras que así lo estimen conveniente podrán introducir un esquema de bonificación a las comisiones establecidas en el inciso b) del artículo 68, el que no podrá admitir discriminaciones para los afiliados o beneficiarios que se encuentren comprendidos en una misma categoría.

La definición de estas categorías de afiliados o beneficiarios sólo podrá ser efectuada en atención a la permanencia, entendiéndose por tal a la cantidad de meses que registren aportes o retiros en la correspondiente Administradora y con independencia de su devengamiento u oportunidad de